



INFORME Anual 2020:

“Venezuela. Situación de Derechos Humanos en un Estado Fallido”

RESUMEN EJECUTIVO



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

DISCURSO DE PRESENTACIÓN
INFORME ANUAL DE DERECHOS
HUMANOS DE LA COMISIÓN
PRESIDENCIAL PARA DERECHOS
HUMANOS DEL GOBIERNO INTERINO



COMISIÓN PRESIDENCIAL
PARA DERECHOS HUMANOS
Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

República Bolivariana de Venezuela

Humberto Prado Sifontes
Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas
Caracas, 2021

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Muy buenos días a todos,

Antes de iniciar mi intervención deseo expresar mis felicitaciones a mi equipo de trabajo, el cual está lleno de gerencia, experticia, ética, juventud y vocación, el cual por segundo año consecutivo realizo un trabajo mancomunado el cual dio como fruto al informe que presentare a continuación.

Tengo el honor de presentar ante ustedes y el país el Informe Anual 2020 de la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, el cual está estructurado en cinco grandes capítulos referentes a:

1. Venezuela ante los Sistemas Internacionales de Protección (ONU y Sistema Interamericano)
2. Los derechos civiles y políticos
3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
4. Grupos en situación de vulnerabilidad
5. Migrantes y refugiados

Al respecto del contenido del Informe, me gustaría anunciar que mi Oficina colaboró con la FFM, que pudo verificar 48 casos. La Comisión Presidencial remitió información semanal sobre 57 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones forzadas y 6 detenciones arbitrarias. Para un total de 69 casos remitidos por mi Oficina. Fue grato observar el

contenido del Informe detallado de más de 400 páginas de la FFM que publicaron en septiembre de 2020.

En cuanto a estadísticas de violaciones graves, la Comisión Presidencial confirmó estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas. Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la Sra. Michelle Bachelet desde la Oficina de la Alta Comisionada. Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana.

La Comisión Presidencial documentó 232 detenciones arbitrarias identificadas. Adicionalmente tuvo noticias de otras 106 víctimas que presuntamente también habrían sido detenidas. Así, 69% de las detenciones en casos de trabajadores de la prensa fueron detenciones clandestinas, y por tanto posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31 % fueron acompañadas de procesos judiciales.

Los DESCAs en Venezuela se han visto severamente violados en 2020 en el contexto de la pandemia. Al menos 79.3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema. Solo 13% de la población tiene acceso a agua potable de forma ininterrumpida. En cuanto al acceso de alimentación 27% de los venezolanos se encontró en estado de mendicidad, 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmaron haber consumido alimentos que preferirían no haber comido. Además, la canasta básica ronda los \$300 dólares americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos para diciembre de 2020.

Los derechos ambientales se han visto severamente perjudicados, esto es, se reportó ecocidio masivo ya que Venezuela es de los más altos con 2.801.136 hectáreas en los últimos 5 años (hasta 2020). Igualmente, acaecieron 20 derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo solamente en el 2020 y se reportó que los peces circundantes al Golfo Triste presentan 350% más de mercurio en su tejido, por lo que quienes los pobladores que consuman de estos corren un riesgo más elevado de padecer enfermedades cancerígenas.

En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores de la salud fueron los más afectados con 297 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 hasta diciembre de 2020, registrados por Médicos Unidos y PROVEA. Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud. La mayoría de los trabajadores son mujeres.

En relación con los migrantes, mi Oficina evidenció que aproximadamente 5.4 millones de venezolanos forman parte de un flujo masivo migratorio, inédito en la región, siendo Colombia el país receptor con la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas en búsqueda de protección, alcanzando la estadística de 1.7 millones de connacionales.

De igual forma, los países de la región como medidas de prevención implementaron el aislamiento social en razón de la pandemia por COVID-19 lo cual produjo una reducción del flujo migratorio, que veníamos vislumbrando en crescendo en los años previos, llegándose a documentar más de 100.000 migrantes venezolanos regresando al país por la frontera colombo-venezolana, emprendiendo un camino a pie de cientos de kilómetros desde Perú, Ecuador y Colombia.

Asimismo, diariamente en el año 2020, a pesar de las medidas de restricción implementadas por los diferentes países debido al covid-19, son más de 500 venezolanos que diariamente abandonan el país a través de caminos irregulares en contextos de gran vulnerabilidad debido a la relativa apertura de las economías que se presentó en los países vecinos.

De igual forma, mi Oficina logró constatar que, en la práctica, la mayoría de los países latinoamericanos no están aplicando la definición de refugiado de Cartagena a los ciudadanos venezolanos, aun cuando la jurisprudencia y los estándares interamericanos aplicables recomiendan hacerlo. Como reflejo de ello, hasta el 14 de agosto de 2020, solo 54.650 venezolanos han sido reconocidos bajo la condición de refugiados en la región; esto equivale solo al 1.04% de los más de 5.4 millones de nacionales que se encuentran en la región.

Al respecto de las mujeres, mi Oficina de la Comisión Presidencial documentó un total de 212 femicidios, de los cuales 56 adicionales se

reportaron en el extranjero. En este mismo sentido, la Comisión efectuó una encuesta nacional sobre el acoso sexual callejero, y en el Informe intitulado “Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto de 2020: Ni una más Venezuela” determinamos que 86.4% de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual. Al mismo tiempo, cerca de 10 millones de mujeres afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos. Al respecto, la ONG CONVITE AC reportó una escasez igual al 78% de los anticonceptivos. Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En cuanto a personas privadas de libertad, mi Oficina confirmó junto a la sociedad civil que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en el 2020 en cárceles nacionales. 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% debido a desnutrición y condiciones de salud. Solamente 4.4% fueron por otras causas.

En relación con la comunidad LGBTI, mi Oficina confirmó que hasta 2017 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual. Para 2020 podemos confirmar que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Igualmente, permanece vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo personas.

En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Presidencial confirmó que acaecieron cerca de 286 ataques en su contra. La Comisión trabajó respecto de esta circunstancia preparando un borrador de proyecto de ley para la adopción de medidas de protección de las personas defensoras mediante la creación de dependencia y análisis en la defensoría del pueblo. Esta será presentada a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.

La Comisión Presidencial ha buscado promover la ratificación de protocolos y tratados internacionales tales como el Protocolo de San Salvador y el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. De la misma manera se han presentado 4 solicitudes de Medidas Cautelares y más de 200 llamados urgentes ante la CIDH.

La Comisión ha colocado el contenido de este informe en manos de los organismos internacionales de protección, especialmente para

cumplir la recomendación de la FFM de acelerar el proceso de examen preliminar ante la CPI y de cumplir la aplicación de la jurisdicción universal respecto de aquellas personas responsables de violaciones graves contra los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la institucionalidad democrática, este Parlamento fue duramente asediado. El 15 de junio de 2020 la ilegítima sala constitucional intervino irregularmente a los partidos AD, PJ y VP. Sus autoridades legítimas fueron desincorporadas y sustituidas por dirigentes cercanos al gobierno de facto de Nicolás Maduro, siendo previamente expulsados de sus respectivos partidos. Lo anterior deja en evidencia la falta de independencia judicial en Venezuela toda vez que el juez constitucional decide lo que se requiere para proteger los intereses del gobierno de facto sin importar que tan irracional pueda ser dicha decisión.

Además, la Comisión tuvo conocimiento de la aprehensión ilegal de 6 miembros de la presidencia interina. Lamentablemente tales actos se extendieron también a su círculo interno dejando un saldo de 5 familiares y amigos privados de libertad. En el mismo sentido, la Comisión observó un ciclo continuado de persecución en contra de la disidencia política, al punto de materializarse en la detención arbitraria de un diputado, un concejal y dos dirigentes políticos de partido democráticos.

La comisión presidencial denunció ante la CIDH y el ACNUDH la toma inconstitucional del palacio federal legislativo que tuvo lugar en enero de 2020, en la cual se impidió el ingreso al Presidente Guaidó.

entre el mes de enero y febrero ocurrieron eventos de calle a favor del Gobierno Interino que contaron la participación del presidente. durante estos tanto el presidente como los periodistas y miembros de la Asamblea Nacional fueron atacados por colectivos que actuaron en conjunto con las autoridades de seguridad.

Para finalizar quiero citar las palabras de un gran luchador por los derechos civiles de su país, el Dr. Martin Luther King, quien dijo, y cito *“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”*.

Por ello estimados señores y señoras debemos seguir documentando continua y sostenidamente las violaciones de derechos humanos que suceden en nuestro país, Venezuela. Lo que se escribe se lee.

Habrá justicia.

H U M B E R T O P R A D O S I F O N T E S

COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL GOBIERNO INTERINO DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

PRESENTATION SPEECH OF ANNUAL
HUMAN RIGHTS REPORT OF THE
PRESIDENTIAL COMMISSION FOR
HUMAN RIGHTS OF THE INTERIM
GOVERNMENT



COMISIÓN PRESIDENCIAL
PARA DERECHOS HUMANOS
Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

República Bolivariana de Venezuela

Humberto Prado Sifontes
Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas
Caracas, 2021

ENGLISH VERSION

Good morning to everyone,

Before starting my speech, I wish to express my congratulations to my team, which is full of management, expertise, ethics, youth and vocation, which for the second consecutive year carried out a joint work which resulted in the report I will present below.

I have the honor to present to you and the country the 2020 Annual Report of the Presidential Commission for Human Rights and Attention to Victims, which is structured in five major chapters concerning:

1. Venezuela before the International Systems of Protection (UN and Inter-American System)
2. Civil and political rights
3. Economic, Social, Cultural and Environmental Rights
4. Vulnerable groups
5. Migrants and refugees

With regard to the content of the report, I would like to announce that my Office collaborated with the United Nations Independent Fact Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, which was able to verify 48 cases. The Presidential Commission sent weekly information on 57 extrajudicial executions, 6 enforced disappearances and 6 arbitrary detentions. For a total of 69 cases submitted by my Office. It was great to observe the content of the Detailed Report of more than 400 pages of the FFM published in September 2020.

As regards statistics of serious violations, the Presidential Commission confirmed a number of extrajudicial executions by FAES equivalent to 400 identified victims and 125 other unidentified victims. This is in addition to the more than 2,500 nationally registered by Ms. Michelle Bachelet, the High Commissioner for Human Rights at the United Nations. We have been able to conclude that there is a pattern of executions that particularly affects young males of limited resources due to the militarization of citizen security.

The Presidential Commission documented 232 arbitrary arrests identified. In addition, the Commission heard from 106 other victims who allegedly also had been arrested. Thus, 69% of arrests in cases of press work were clandestine arrests, and therefore possibly illegal or arbitrary, while only 31% were accompanied by legal proceedings.

Economic, Social, Cultural and Environmental Rights in Venezuela has been severely violated in 2020 in the context of the pandemic. At least 79.3% of the population does not have enough acquiring power to afford the commodity bundle. 96% of households are in a situation of poverty and 79% in extreme poverty. Only 13% of the population has access to safe drinking water on an uninterrupted way. Regarding food access 27% of Venezuelans found themselves in a state of begging, 42% of households had to seek for food on the street and 35% claimed to have consumed foods they would rather not have eaten. In addition, the commodity bundle is around US\$300, which equates to 230 minimum wages from Venezuela by December 2020.

Environmental rights have been severely harmed, i.e. massive ecocide was reported as Venezuela is among the highest with 2,801,136 hectares in the last 5 years (until 2020). Similarly, 20 oil spills hit only the Lake of Maracaibo in 2020 and it was reported that fish surrounding the Sad Gulf have 350% more mercury in their tissue, so those who consume them are at higher risk to contract cancer diseases.

Regarding vulnerable groups, health workers were the most affected with 297 health workers killed by COVID-19 for December 2020, registered by the NGO United Physicians and PROVEA. It is noteworthy that Venezuela has the highest mortality rate in the region of health workers. Most workers are women.

With regard to migrants, my Office showed that approximately 5.4 million Venezuelans are part of a massive migration flow, unpublished in the region, Colombia being the recipient country with the highest number of Venezuelans and Venezuelans seeking protection, reaching the statistic of 1.7 million conational.

Similarly, the countries of the region as prevention measures implemented social isolation due to the fact of the COVID-19 pandemic which resulted in a reduction in the migration flow, which my Office had been glimpsing in crescendo in the previous years, taking to identified more than 100,000 Venezuelan migrants returning to the country along the Colombian-Venezuelan border, embarking on a path on foot of hundreds of kilometers from Peru, Ecuador and Colombia.

Also, every day in 2020, despite the restriction measures implemented by different countries due to covid-19, there are more than 500 Venezuelans who leave the country daily through irregular roads in highly vulnerable contexts due to the relative opening of economies in neighboring countries.

Similarly, my Office found that in practice most Latin American countries are not applying Cartagena Declaration's definition of refugee to Venezuelan citizens, even though applicable inter-American jurisprudence and standards recommend doing so. Reflecting this, as of 14 August 2020, only 54,650 Venezuelans have been recognized as refugees in the region; this equates to only 1.04% of the more than 5.4 million nationals in the region.

On women's issues, my Office of the Presidential Commission documented a total of 212 femicides, of which an additional 56 were reported abroad. In the same regard, the Commission conducted a national survey on street sexual harassment, and in the report titled "Structural Discrimination and Gender-Based Violence in Venezuela until August 2020" determined that 86.4% of the female population reports that they were always or almost always sexually harassed. At the same time, about 10 million women affected by the reduction of 326 tons of contraceptives. In this regard, the NGO CONVITE AC reported a shortage of 78% of contraceptives. This affects the exercise of sexual and reproductive rights, affecting millions of Venezuelans.

Regarding persons deprived of their liberty, my Office confirmed together with civil society that at least 299 extrajudicial executions occurred in 2020 in national prisons. 61% of deaths were associated with police violence, while 33% due to malnutrition and health conditions. Only 4.4% were for other reasons.

In relation to the LGBTI community, my Office confirmed that up to 2017 109 people had been killed because of their sexual orientation. By 2020 we can confirm that there are about 6,000 LGBTI families that require legal protection and do not have it. Likewise, many laws that promote discrimination against this group of people remain in force.

With regard to human rights defenders, the Presidential Commission confirmed that nearly 286 attacks against them took place. The Commission worked on this fact by preparing a draft bill for the adoption of measures to protect defenders through the creation of dependence and analysis in the ombudsman's office. It will be submitted to the Delegated Commission of the National Assembly.

The Presidential Commission has sought to promote the ratification of international protocols and treaties such as the San Salvador Protocol and the Additional Protocol to the United Nations Convention against Torture. In the same way, 4 applications for Precautionary Measures and more than 200 urgent calls have been submitted to the IACHR.

The Commission has placed the contents of this report in the hands of international protection agencies, in particular to comply with the FFM's recommendation to speed up the preliminary review process before the ICC and to comply with the application of universal jurisdiction over those responsible for serious human rights violations, as well as crimes against humanity.

As for democratic institutionally, this Parliament was harshly beset. On 15 June 2020, the illegitimate constitutional chamber irregularly intervened with the AD, PJ and VP parties. His legitimate authorities were disincorporated and replaced by leaders close to the de facto government of Nicolás Maduro, and were previously expelled from their respective dissident parties. This highlights the lack of judicial independence in Venezuela whenever the constitutional court decides

what is required to protect the interests of the de facto government no matter how irrational such the decision can be.

In addition, the Commission became aware of the illegal apprehension of 6 members of the interim presidency. Unfortunately, such acts also extended to their inner circle leaving a balance of 5 family and friends deprived of their liberty. In the same sense, the Commission observed a continuing cycle of persecution against political dissent, to the point of materializing in the arbitrary detention of a Member, a counselor and two democratic party political leaders.

The presidential commission denounced before the IACHR and OHCHR the unconstitutional take-down of the federal legislative palace in January 2020, which prevented President Guaidó from entering.

Between January and February, street events took place in favor of the Interim Government that counted the president's participation. During these both the president and journalists and members of the National Assembly were attacked by groups that acted in conjunction with the security authorities.

Finally, I would like to quote the words of a great civil rights fighter from his country, Dr. Martin Luther King, who said, and I quote, *"The worrying thing is not the perversity of the evil ones but the indifference of the good ones"*.

That is why, ladies and gentlemen, we must continue to continuously document the human rights violations that are happening in our country, Venezuela. What is written is read.

There will be justice.

HUMBERTO PRADO SIFONTES

PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS AND CARE
FOR VICTIMS OF THE INTERIM GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN
REPUBLIC OF VENEZUELA